



COMITÉ PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTA RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 13/18

En Mexicali, Baja California, siendo las nueve horas del día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Maestro Salvador Juan Ortiz Morales, la Consejera Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, Magistrada Columba Imelda Amador Guillén, el Magistrado Félix Herrera Esquivel, el Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, Contador Público Jorge Alberto Coral Gutiérrez, el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna, Licenciado Jesús Ariel Durán Morales y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Técnica del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria 13/2018.

La Secretaria del Comité da cuenta con el quórum de asistencia al Presidente, quien declara su existencia, por lo cual se inicia esta sesión. Acto continuo, sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

I. Aprobación del orden del día.

Por unanimidad se aprobó en sus términos.

II. Asuntos a tratar:

PRIMERO. Procedimiento de clasificación de la información y elaboración de versión pública 07/2018, derivado de la solicitud de información realizada mediante el Sistema de Solicitudes Electrónicas del Poder Judicial, con número de folio 0007/18, de fecha seis de enero de dos mil dieciocho.

SEGUNDO. Procedimiento de clasificación de la información y elaboración de versiones públicas 08/2018, derivado de la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 00197318, de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos los proyectos de resolución presentados por la Secretaria Técnica, el Presidente somete a consideración de los integrantes del Comité, ambos asuntos y con las facultades establecidas en las fracciones I y II del artículo 54, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 11 y 13 fracción XIII, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, **se aprobó por unanimidad de votos** por sus propios y legales fundamentos, la resolución derivada del procedimiento de clasificación 07/2018, relativo a la clasificación de **confidencialidad de datos personales**, realizado por la Jueza Tercero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, al dar respuesta a la solicitud de información 0007/18 y en consecuencia, se autoriza la versión pública elaborada por dicha autoridad, de las constancias que integran el expediente de interés del peticionario.

Por otro lado, **se aprueba la resolución derivada del procedimiento de clasificación 08/2018**, respecto a la información solicitada mediante el registro

00197318 de la Plataforma Nacional de Transparencia, relativa a la clasificación de confidencialidad de datos personales, realizada en las sentencias emitidas por los titulares de los Juzgados Segundo, Quinto, Séptimo y Octavo Civil, así como del Segundo Familiar del Partido Judicial de Mexicali; Tercero y Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana; Segundo Civil Provisional, Segundo Familiar y Mixto de Primera Instancia de San Quintín, del Partido Judicial de Ensenada y por ende, se autorizan las **versiones públicas** de las sentencias dictadas por los titulares de los juzgados citados con anterioridad, CONSIDERANDO QUE:

A) Mediante la solicitud 07/2018, se pide *"... la versión pública de un expediente concluido que trate sobre divorcio sin expresión de causa, específicamente uno en el cual, desde el escrito de demanda se haya hecho valer el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad; sin que se haya aludido a alguna de las causales de divorcio señaladas en el artículo 264 del Código Civil vigente en el estado, y por supuesto que no sea un divorcio voluntario"*; por otra parte, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con el registro 00197318 se solicitó: *"La versión pública de la más reciente sentencia dictada por cada uno de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado..."*.

B) Previo al pago del costo de reproducción realizado por el peticionario, mediante oficio número 1010/2018, de fecha de recibido 21 de marzo del año en curso, la Jueza Tercero Familiar del Partido Judicial de Mexicali remite una versión pública de un expediente cuyo proceso reúne las características señaladas por el peticionario. Igualmente, los titulares de los Juzgados Segundo, Quinto, Séptimo y Octavo Civil, así como del Segundo Familiar del Partido Judicial de Mexicali;

Tercero y Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana; Segundo Civil Provisional, Segundo Familiar y Mixto de Primera Instancia de San Quintín, del Partido Judicial de Ensenada, mediante los oficios 1336/2018, S/N, 23/2018, 833/2018, 485/2018, 1099, 1175/2018 51-J/2017, 1020/2018 y 42/2018, remiten la versiones públicas de las sentencias requeridas, en las cuales se suprimieron los datos personales que se clasificaron como confidenciales, cubriendo el espacio correspondiente mediante la utilización de una línea negra.

C) Recibidas las versiones públicas del expediente y de las sentencias de referencia, la Unidad de Transparencia verificó si la supresión de los datos personales se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable. Hecho que fue lo anterior, se turnaron los documentos y proyectos de resolución al Comité de Transparencia, para su análisis. Los integrantes del Comité, atendiendo a los artículos 121, 139 y 141 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por tratarse de una solicitud en la que se ve involucrada información confidencial, procedieron a determinar si los datos suprimidos en los documentos que se analizan, son o no confidenciales, mediante la aplicación de la prueba de daño a que se refiere el artículo 109 de la Ley local de transparencia y acceso a la información pública, lo que se hizo, tomando en cuenta que:

1) De las versiones públicas elaboradas.

En principio, toda información generada, administrada, adquirida o en posesión de Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es pública, con las salvedades establecidas en la propia Ley. La

versión pública de documentos y resoluciones, permite la consulta de todo interesado en la actuación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, pues se elaboran suprimiendo la información considerada confidencial o reservada, lo que requiere como acto conjunto a su elaboración, emitir un criterio que la clasifique, como restringida al público.

Por otro lado, considerando que en el caso concreto, el acto de clasificación se hace con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información y que ello exige, como ya quedó asentado, la exposición de los motivos que la justifiquen y aplicar la prueba de daño, lo que implica por una parte, precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información omitida y por otra, determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o intereses públicos tutelados; es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico, a lo que la doctrina ha denominado la prueba de daño.

2) Del acto de clasificación de la información.

Al respecto, el artículo 106 de la Ley en cita, indica que la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina, que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

En el caso concreto, para efectos del acto de clasificación, **encontramos como elementos objetivos, los siguientes:**

2.1) Las versiones públicas de mérito, fueron elaboradas en observancia al marco normativo que rige en la materia, esto es, a lo establecido en los artículos

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, fracciones VI, XII, XV, 106, 107, 109 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 4 fracciones III, VI, IX, 10 fracciones IX y XVIII, 55, 73, 77, 79, 82, 87, y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.

2.2) De los propios documentos en estudio, se desprende que **no existe consentimiento expreso de titulares de los datos personales suprimidos**; esto es, de los **sujetos particulares** que intervienen en el proceso del cual se deriva la versión pública elaborada, lo que resulta necesario **para que éstos puedan ser comunicados a terceros**, como se exige en el diverso numeral 140 del Reglamento de la Ley local de la materia.

2.3) En virtud de lo anterior y **como consecuencia de la aplicación de la normativa reseñada, en la elaboración de la versión pública de mérito, se suprimió toda información de carácter confidencial** de los particulares aludidos, lo cual se justifica, **atendiendo la obligación legalmente establecida de proteger y resguardar la información clasificada** como reservada o confidencial, dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, **considerando** que es innegable, **que la divulgación de los datos suprimidos representan un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar la vida privada y la intimidad de los particulares**, ya que se trata de información que no es de interés general; es decir, **los datos omitidos se refieren a: nombres de las partes actora y demandada, abogados patronos, autorizados para oír y recibir notificaciones, domicilios, nombres de los hijos, bienes inmuebles, firmas, actas**

de matrimonio y de nacimiento, huellas dactilares, números de teléfonos, fotografías, credencial de elector, cantidades, porcentajes, menores de edad, apoderados legales, entre otros, **información de carácter confidencial, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California**, la que en su artículo 4, fracción XII, establece **que se entenderá por información confidencial: *La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; la que se refiere al secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho de entregarla con ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley***”, lo que se complementa con lo dispuesto en el precepto normativo 136, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que a la letra reza: **“Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género; los referidos a las características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud**

físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, números de cuenta, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjetas de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafa y electrónica, códigos de seguridad, etcétera”.

2.4) De la prueba de daño. De los diversos numerales 121, 139 y 141 del Reglamento de la Ley estatal de la materia, se desprende que en caso de que la clasificación se hiciera con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se deberán exponer los motivos que la justifiquen y aplicar una prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley estatal, en la Ley General de Transparencia, el Reglamento de la Ley local y los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables, **por lo que resulta pertinente citar** el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica **que se entenderá por “Prueba de Daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”.**



Así las cosas y dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona el bien jurídico tutelado por tratarse de información concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y que el daño que puede producirse con su publicidad, es mayor que el interés de conocerla, **se determina que al tratarse de datos personales de carácter confidencial protegidos por la Ley y que no se cuenta con la autorización de los titulares de los mismos, para su entrega o divulgación, los datos que se omiten deben clasificarse como confidenciales y restringir su acceso.**

Efectivamente, con la aplicación de la prueba de daño, como sujeto obligado debemos justificar conforme al artículo 109 de la Ley estatal de la materia, que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. A este respecto cabe decir que liberar la información de los sujetos privados que intervinieron en el expediente y sentencias de interés para los solicitantes, **representa un riesgo real de injerencia de toda índole en sus vidas privadas, no autorizada, de ahí que no pueda liberarse la información, privilegiando el derecho a la intimidad de los particulares;** II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Del análisis del punto anterior, se advierte que **el daño que se pudiese causar a los particulares al divulgar sus datos personales, supera el interés público de que se conozcan,** pues no se puede suponer ningún interés público de liberarse los mismos, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, que no se cuenta con el consentimiento de los particulares para la liberación de sus datos; III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio

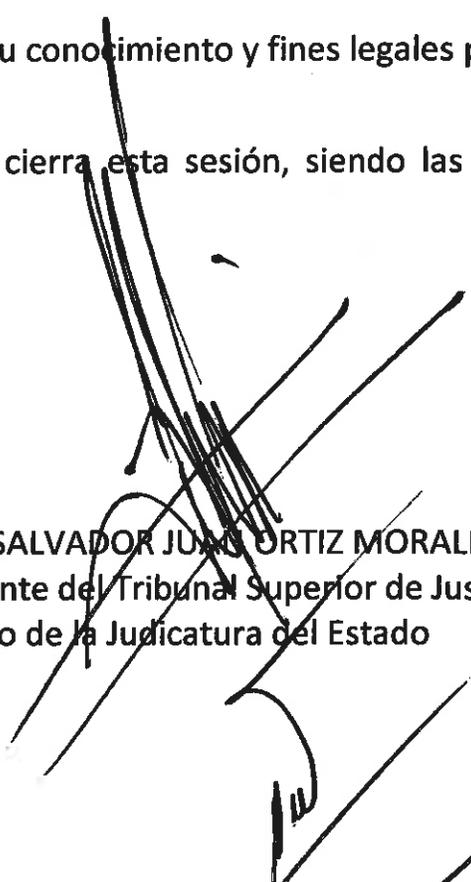
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. En el caso que nos ocupa, la **limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la intimidad de los terceros y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento en la protección de los derechos fundamentales, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.**

3) De la aprobación del acto de clasificación y versiones públicas elaboradas:

Visto lo fundado y motivado en los apartados anteriores, los integrantes del Comité, **ACUERDAN: aprobar la clasificación de la información de carácter confidencial**, realizado por la Jueza Tercero Familiar del Partido Judicial de Mexicali, al dar respuesta a la solicitud de información 0007/18 y en consecuencia, se autoriza la versión pública elaborada por dicha autoridad. Asimismo, con respecto a la información solicitada mediante el registro 00197318 de la Plataforma Nacional de Transparencia, se aprueba la clasificación de confidencialidad de datos personales, realizada en las sentencias emitidas por los titulares de los Juzgados Segundo, Quinto, Séptimo y Octavo Civil, así como del Segundo Familiar del Partido Judicial de Mexicali; Tercero y Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana; Segundo Civil Provisional, Segundo Familiar y Mixto de Primera Instancia de San Quintín, del Partido Judicial de Ensenada y por ende, se **autorizan las versiones públicas** de las sentencias dictadas por los titulares de los juzgados citados, por las **razones y fundamentos expuestos con anterioridad.**

Notifíquese y entréguese copia de esta acta a los solicitantes, por conducto de la Unidad de Transparencia, junto con la copia de las respuestas y las versiones públicas de la información solicitada. Igualmente, lo anterior deberá notificarse vía correo electrónico, por conducto de la Unidad de Transparencia, a las autoridades ya indicadas, para su conocimiento y fines legales procedentes.

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las diez horas del día veintiuno de marzo de 2018.



MAGISTRADO SALVADOR JUNCOS ORTIZ MORALES
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADA COLUMBA IMELDA AMADOR GUILLÉN
Consejera Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Disciplina del
Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADO FÉLIX HERRERA ESQUIVEL
Adscrito a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia



LIC. JESÚS ARIEL DURÁN MORALES
Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna



C. P. JORGE ALBERTO CORAL GUTIÉRREZ
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura del Estado



M.D. ELSA AMALIA KULJACHA LÉRMA
Secretaria Técnica del Comité